Bogotá, D.C. 13 de abril de 2023.

Honorable Representante

**JUAN CARLOS WILLS**

Presidente

Comisión Primera de Senado

Ciudad

**REFERENCIA: Informe de Ponencia Positiva para primer debate en segunda vuelta del Proyecto de Acto Legislativo 173 de 2022 Cámara - 035 de 2022 Senado**

Atento saludo,

En cumplimiento del encargo hecho por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional del Senado del Congreso de la República y de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, por medio del presente escrito nos permitimos rendir Informe de **Ponencia Positiva** para primer debate en segunda vuelta en Cámara de Representantes, al Proyecto de Acto Legislativo número 173 de 2022 Cámara - 035 de 2022 Senado, “**Por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la jurisdicción agraria y rural**”**.**

Cordialmente,

**HR. HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ H.R. MARELEN CASTILLO TORRES**

**PONENTE PONENTE**

**HR. ADRIANA CAROLINA ARBELAEZ H.R. GABRIEL BECERRA YAÑEZ**

**PONENTE PONENTE**

**H.R. ALVARO LEONEL RUEDA C. H.R. DELCY ESPERANZA ISAZA B.**

**PONENTE PONENTE**

**H.R. ORLANDO CASTILLO ADVINCULA H.R. ASTRID SANCHEZ MONTES**

**PONENTE PONENTE**

**HR. SANTIAFO OSORIO MARÍN H.R. LUIS ALBERTO ALBÁN**

**PONENTE PONENTE**

**INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN SEGUNDA VUELTA EN CÁMARA DE REPRESENTANTESAL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 173 CAMARA- 035 DE 2022 SENADO**

**“POR EL CUAL SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y SE ESTABLECE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL”**

1. **TRÁMITE DE LA INICIATIVA**

El Proyecto de Acto Legislativo que crea la Jurisdicción Agraria y Rural fue radicado el día 31 de agosto de 2022 en un esfuerzo conjunto entre Gobierno Nacional y numerosos Senadores/as y Representantes a la Cámara. De lo anterior se desprende que esta iniciativa de reforma constitucional es de origen mixto y entre sus autores figuran el Ministro del Interior, Doctor Alfonso Prada Gil, Ministro de Justicia y del Derecho, Doctor Néstor Iván Osuna Patiño, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Doctora Cecilia López Montaño, y presentado por los **Honorables Representantes**: Alirio Uribe Muñoz, Jorge Andrés Cancimance López, Jorge Eliecer Tamayo Marulanda, Pedro Baracutao García Ospina, Luis Alberto Albán Urbano, Jairo Reinaldo Cala Suárez, Karyme Adrana Cotes Martínez, Duvalier Sánchez Arango, Gabriel Ernesto Parrado Durán, German José Gómez López, Astrid Sánchez Montes de Oca, Carlos Adolfo Ardila Espinosa, John Jairo González Agudelo, Oscar Hernán Sánchez León, Juan Pablo Salazar Rivera, James Hermenegildo Mosquera Torres, Gabriel Becerra Yáñez, Luz María Múnera Medina, Heráclito Landinez Suárez, Luis Ramiro Ricardo Buelvas, Leyla Marleny Rincón Trujillo, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, Ermes Evelio Pete Vivas, William Ferney Aljure Martínez, Diógenes Quintero Amaya, Juan Carlos Vargas Soler, Carlos Carreño y los **Honorables Senadores**: Isabel Cristina Zuleta López, Imelda Daza Cotes, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Omar de Jesús Restrepo Correa, Inti Raúl Asprilla Reyes, César Augusto Pachón Achury, Yuly Esmeralda Hernández Silva, Sandra Ramírez y Julián Gallo Cubillos.

Una vez fue radicada la iniciativa de reforma constitucional ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, al Proyecto de Acto Legislativo le fue asignado el número 173 de 2022 de Cámara y fue publicado el día 8 de septiembre de 2022 en la Gaceta del Congreso No. 1040 de 2022.

Posteriormente, mediante oficio C.P.C.P 3.1 -0248-2022 del 14 de septiembre de 2022 y conforme consta en el Acta No. 09 de la Mesa Directiva, fueron designados como coordinadores ponentes -para primer debate- los Honorables Representantes Delcy Esperanza Isaza Buenaventura y Gabriel Becerra Yañez; y como ponentes los Honorables Representantes Santiago Osorio Marín, Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, Álvaro Leonel Rueda caballero, Hernán Darío Cadavid Márquez, Orlando Castillo Advincula, Astrid Sánchez Montes De Oca, Marelen Castillo Torres y Luis Alberto Albán Urbano del mencionado proyecto. El 21 de septiembre de 2022 los coordinadores ponentes solicitaron a la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Audiencia Pública para conocer las diferentes posiciones del gobierno, academia, organizaciones y ciudadanía.

Mediante la Resolución No. 11 del 18 de septiembre de 2022, la mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional permanente de la H. Cámara de Representantes convocó a audiencia pública la cual se realizó el día 29 de septiembre de 2022 a las 2:00 pm en el recinto de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con el fin de escuchar las opiniones del Gobierno Nacional, la ciudadanía, los congresistas y la sociedad civil. Producto de esta Audiencia se amplió y se consolidó la ponencia de primer y segundo debate en la Cámara de Representantes.

De las intervenciones realizadas es posible identificar como consenso en las organizaciones gubernamentales, academia y comunidad civil, la importancia de cumplir con la obligación derivada del Acuerdo Final de Paz (2016) consistente en la conformación de una Jurisdicción Agraria con jueces e instancias capaces de dirimir y resolver los problemas jurídicos presentes en el mundo rural y agrario, incluyendo órganos de cierre capaces de dirimir dichos asuntos.

El 03 de octubre de 2022, se rindió informe de ponencia para primer debate ante la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso número 1191 de 2022 del 04 de octubre de 2022.

El 06 y 11 de octubre de 2022, respectivamente, tuvieron lugar las discusiones de la ponencia en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En la sesión del 06 de octubre de 2022 se aprobó el informe de ponencia mayoritaria, igual que los artículos 1,4,5 y 7 como se presentaron en la ponencia referida (sin proposición), siendo aprobados por unanimidad. En la segunda sesión realizada el 11 de octubre de 2022, se votaron los artículos 2,3 y 6 con proposiciones avaladas, así como el título y la pregunta, resultando aprobado por unanimidad. La Mesa Directiva de la Comisión Primera decidió mantener como ponentes para segundo debate a los mismos Honorables Representantes coordinadores y ponentes designados para el primer debate.

El 18 de octubre de 2022, se rindió informe de ponencia para segundo debate ante la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso número 1276 de 2022 del 19 de octubre de 2022.

El 20 de octubre de 2022, se llevó a cabo la sesión de la Plenaria de la Cámara de Representantes, en la que se discutió y aprobó en su totalidad en segundo debate el Proyecto de Acto Legislativo 173 de 2022 Cámara – 35 de 2022 Senado “por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la jurisdicción agraria y rural”. Se aprobaron los artículos 1,3 y 4 como venían en la ponencia, los artículos 2,5,6 y 7 con proposiciones avaladas. Se incluyen 5 artículos nuevos que, con el ánimo de armonización, agregan la expresión “Corte Agraria y Rural” a los artículos 126,197,231,232 y 233 de la Constitución Política.

Posteriormente, el viernes 4 de noviembre, el senador Alexander López presentó ponencia positiva para el tercer debate acumulado (Primer Debate en Senado llevado a cabo en la Comisión Primera Constitucional Permanente) del Proyecto de Acto Legislativo en cuestión. Una vez radicada la ponencia, la Mesa Directiva de la Comisión Primera de Senado procedió a su publicación el día 8 de noviembre en la Gaceta 1381/2022 y, de manera consecuente, programó la discusión del proyecto para el día miércoles 9 de noviembre de 2022. En sesión del 9 de noviembre de 2022, tal y como se había anunciado en el respectivo orden del día, se procedió a discutir el Proyecto de Acto Legislativo en la Comisión Primera Constitucional Permanente de Senado, resultando aprobado tal y como consta en las Actas No. 21 y 22 del 8 y 9 de noviembre de 2022, respectivamente.

Luego de aprobado el Proyecto de Acto Legislativo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se procedió a radicar ponencia para el cuarto debate acumulado (Segundo Debate en Senado, llevado a cabo en la Plenaria de la corporación) la cual fue publicada el 18 de noviembre en la Gaceta 1463 de 2022. La discusión en Plenaria de Senado para la primera vuelta del acto legislativo se programó para el día 06 de diciembre de 2022, fecha en la cual resultó aprobado el proyecto de acto legislativo en cuarto debate acumulado de la primera vuelta de discusión.

Una vez surtidos los cuatro debates de la primera vuelta del proyecto de reforma constitucional, el 12 de diciembre de 2022 se publicó el informe de conciliación en Senado a través de la Gaceta 1625 de 2022 y, posteriormente se radicó una fé de erratas del informe de conciliación que se publicó el día 13 de diciembre en la Gaceta 1645 de 2022. Una vez publicado el informe de conciliación en la Gaceta 1645 de 2022, notificando las correcciones realizadas (fe de erratas), se procedió a discutir y aprobar el mencionado informe con correcciones el día XX de diciembre de 2022 en la Plenaria del Senado de la República.

Por su parte, el informe de conciliación para discusión en la Cámara de Representantes fue publicado el día 12 de diciembre de 2022 mediante Gaceta No. 1627 de 2022 y, posteriormente se publicó una fe de erratas del informe de conciliación el día 13 de diciembre de 2022 en la Gaceta No. 1647 de 2022.

1. **OBJETO DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO.**

Esta iniciativa tiene por objeto establecer el marco constitucional para la resolución de controversias respecto a los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de bienes inmuebles en suelo rural, mediante la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural.

1. **CONTENIDO DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO**

El articulado radicado originalmente contaba con siete (7) artículos, a saber:

|  |  |
| --- | --- |
| **Art 1** | Modificación del art 116 de la Constitución Política, en el que se incluye a la Corte Agraria y Rural como administradora de justicia. |
| **Art. 2** | Adiciona al Título VIII de la Constitución Política (De la Rama Judicial) el Capítulo IV-A, “De la Jurisdicción Agraria y Rural”, composición de la Corte Agraria y Rural, requisitos de los magistrados, parágrafo transitorio para elección por primera vez |
| **Art. 3** | Modificación del Art. 156 de la Constitución Política, facultad de la Corte Agraria y Rural de presentar proyectos de ley |
| **Art 4** | Modificación del Art 238 de la Constitución Política, facultad de suspensión de los actos administrativo |
| **Art. 5** | Término de 2 años para que la Jurisdicción Agraria y Rural entre en funcionamiento. |
| **Art 6** | Exhorta al Congreso a reglamentar la conformación, el funcionamiento y demás normas sustantivas y procedimentales que se requieran para la administración de justicia por esta jurisdicción. |
| **Art. 7** | Vigencia y armonización con la Constitución. |

1. **AUDIENCIA PÚBLICA EN CÁMARA DE REPRESENTANTES**

Mediante la Resolución No. 11 de 2022, la mesa directiva Comisión Primera Constitucional permanente de la H. Cámara de Representantes convocó a audiencia pública, conforme la proposición presentada por los Coordinadores Ponentes H.R. [Delcy Esperanza Isaza Buenaventura](https://www.camara.gov.co/representantes/delcy-esperanza-isaza-buenaventura) y [Gabriel Becerra Yañez](https://www.camara.gov.co/representantes/gabriel-becerra-yanez), la cual fue realizada el día 29 de septiembre de 2022 de forma mixta en forma presencial en el recinto de la Comisión Primera Constitucional y mediante la plataforma Google meet, a las 2:00 pm. Entre los intervinientes hubo Representantes a la Cámara, académicos, miembros de organizaciones sociales, entre otros. en términos generales las intervenciones pueden agruparse así:

El **H.R. GABRIEL BECERRA** -coordinador ponente- señaló que este es uno de los proyectos priorizados en la agenda del nuevo gobierno por cuanto tiene que ver con el 99% del territorio del país que es catalogado dentro de la ruralidad y que -como se sabe- está cruzado desde hace muchas décadas por profundos conflictos que están en la base de lo que ha sido la extensa historia de violencia de nuestra nación.

Por su parte, el doctor **CARLOS AURELIO MERCHÁN - en representación de la Defensoría del Pueblo-** señaló que para la Defensoría es muy importante garantizar el acceso a la justicia por parte de las comunidades rurales, por lo que la Entidad ha venido haciendo un acompañamiento a los esfuerzos que se han realizado, tendientes a garantizar y cumplir el Acuerdo Final en relación con la implementación con la jurisdicción.

En ese sentido, consideran que el PAL es muy robusto, necesario, y no atiende a un asunto nuevo, sino que tiene antecedentes históricos previos que por diferentes razones no se han concretado.

Por lo anterior, para la Defensoría es fundamental que el compromiso del Acuerdo se garantice bien sea a través de la Jurisdicción Agraria o a través de la Especialidad. Manifiesta que a través de los diferentes proyectos e iniciativas que se han presentado para implementar la jurisdicción especial agraria, han dejado aportes doctrinarios, legislativos, entre otros, los cuales no pueden ser desconocidos por parte del Gobierno, y que tal ejercicio es un precedente importante por lo que se hace una invitación para que el compromiso del acuerdo final se lleve a la práctica, se concrete la Jurisdicción como está consagrada en el PAL o a través de la especialidad.

A la Defensoría le preocupa en este momento la redacción actual del PAL porque se tiene una estructura judicial donde la jurisdicción ordinaria está recogida en la Corte Suprema de Justicia. Cuando se habla de Jurisdicción ordinaria estamos hablando a través de ella de unas jurisdicciones especiales: civil, laboral, y en ese sentido se tiene un esquema procesal y que si bien es cierto se tiene recogido en el Código General del Proceso como una norma macro para todos los procesos. También existen unos códigos procesales de acuerdo con la jurisdicción que corresponda, entonces hay un código procesal en lo civil, otro en el derecho laboral y esto nos permitiría pensar que cuando se hable de una especialidad agraria podríamos contar con esos instrumentos no solo en el contenido de fondo sino en el tratamiento procesal.

Reitera y aclara que para la Defensoría del Pueblo la implementación de una manera o de otra, responderá a la decisión mayoritaria que se pueda tomar desde el legislativo lo importante es el que se cumpla con el compromiso del acuerdo final en cuanto a la implementación de la jurisdicción porque sí es fundamental que en las poblaciones rurales, campesinas, de pescadores artesanales, tengan un instrumento que les permita acceder a la justicia de manera pronta y eficaz y según las condiciones del territorio para que no sea una justicia extraña y alejada del territorio sino que se pueda implementar allí y tenga el conocimiento necesario para tratar las problemáticas asociadas con la tenencia y formalización de la tierra.

Se continúa con la intervención del señor ministro del Interior, **ALFONSO PRADA**, quien participa de manera remota y resalta la importancia de la realización de estas audiencias como un instrumento de participación consagrado en la Ley 5ª de 1992, cuyo objetivo no es que simplemente ellos participen como gobierno sino también la ciudadanía.

Posteriormente interviene de manera presencial el Viceministro General del Interior, **GUSTAVO GARCÍA**. Señala que estas discusiones son un paso en la dirección correcta no solamente en lo que es la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, sino para resolver en gran medida y de fondo los problemas históricos que hay en Colombia. Por eso, en las discusiones que se han sostenido al interior del Gobierno, se tomó la decisión de radicar el PAL de Jurisdicción Agraria porque, si bien existen varias teorías sobre cómo vamos a afrontar el problema de tierras en Colombia, sin lugar a dudas tenemos que afrontar una realidad histórica, judicial y de conflicto en el país.

Resalta que el conflicto se ha venido acrecentando y que las problemáticas se han venido degenerando con las herramientas e instituciones actuales en Colombia, por eso afrontar como lo quiere hacer el presidente Gustavo Petro y el ministro Alfonso Prada el problema de la tierra en el país, exige de manera decisiva cambiar la institucionalidad que tiene que ver con la resolución del problema de tierras en Colombia.

Por eso la Jurisdicción Agraria se eleva como una solución de fondo que puede cambiar y transformar el proceso de estructuración, de jurisprudencia y de soluciones a los conflictos agrarios que existen en el país. Se sabe que hoy en día existen diferentes polémicas por las circunstancias que aquejan a la Nación, sin embargo, se sabe también que esas políticas tienen que ver con reivindicaciones históricas a las comunidades, con necesidades propias del campesinado, de nuestra ciudadanía, pero también las reivindicaciones históricas se pueden y se deben hacer mediante estos instrumentos constitucionales.

Indica que la Jurisdicción Agraria y un Acto Legislativo muy importante que se aprobó en primer debate la semana pasada, que tiene que ver con el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos constitucionales, empiezan a construir esa narrativa de cambio y transformación en las cuales vamos a hacer propietarios de la tierra a la gente en Colombia. Con ello, no solamente se retrotraen unas injusticias históricas en nuestro país, sino que, también se hace un combate efectivo contra fenómenos delincuenciales como el narcotráfico y la siembra de cultivos ilícitos.

Más allá de entender estos fenómenos en el tema de que son fenómenos de conflicto, se asumen como un fenómeno histórico, como un fenómeno de ingresos y de justicia social. Por eso el proyecto se enmarca dentro de los procesos de justicia social, justicia ambiental y paz total. Por último, solicita que todas las intervenciones nutran y aporten en esta discusión y que ojalá se pueda mejorar en todo lo que se pueda el proyecto y señala que desde el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional están abiertos a escuchar y a construir un mejor proyecto.

Continúa la intervención presencial de la Viceministra de Promoción de la Justicia, **JOHANA ALEXANDRA DELGADO**, quien manifiesta que una de las misiones del Ministerio de Justicia y del Derecho está enfocada en el acceso a la justicia, por eso lo que desde esa Entidad se apoya es una reforma constitucional para cumplir con los mandatos que les ha dado la misma Constitución y el Acuerdo de Paz al ser parte integrante de nuestro estatuto normativo.

Indica que el Acuerdo de Paz tiene y hace énfasis específico en las condiciones especiales y particulares que han rodeado el conflicto interno, es evidente que siempre hemos tenido a la población campesina, al campesinado, a las mujeres rurales, a los hombres que siempre han trabajado por darle de comer a este país, en un completo abandono. Por este motivo desde la Presidencia del doctor Gustavo Petro Urrego, con todo el equipo de gobierno, es de especial interés y relevancia que este PAL llegue a término.

Continúa señalando que es importante que en un Estado de Derecho en el cual se reparten claramente funciones y competencias, tener en cuenta el avance de la sociedad. La jurisdicción especial no es que sea una invención nuestra, no es una invención del presidente y de unas ideas revolucionarias, es simplemente una deuda histórica que tenemos con los campesinos y campesinas del país y que tenemos que regular desde el derecho.

Indica que este es el primer paso para que podamos cambiar la estructura institucional, sin embargo, es evidente que los temas que se desarrollan en relación con la jurisdicción agraria y rural están también enfocados a la determinación de una Ley Estatutaria que posteriormente se encargará de definir derechos, obligaciones, sistema y organización definitiva para la aplicación y la implementación de esta reforma política.

Manifiesta que la Corte Constitucional ha sido también insistente en esta materia y no se puede seguir haciendo oídos sordos a los llamados de la Corte. En sentencia muy reciente, SU-288 de 2022, claramente se le hace un exhorto al Gobierno Nacional para que se pronuncie en materia de baldíos y en ese exhorto número 15 se nos dice exactamente que el Gobierno no solo tiene que hacer un registro sobre qué son los baldíos y cómo va a funcionar, sino que acá tenemos un problema a través del cual se debe regular desde el ordenamiento jurídico vigente también los postulados constitucionales que nuestra Carta Política desde 1991 nos impone.

Señala que esta obligación legal es parte de los intereses del Ministerio de Justicia y del Gobierno Nacional y que están comprometidos en el desarrollo del país, en la construcción de formas de acceso a la justicia que realmente resuelvan los problemas de cada parte de la población teniendo en cuenta enfoques diferenciales, diferenciados, teniendo en cuenta que no por estar efectivamente en un lugar o en otro se tiene la posibilidad de vulnerar los derechos de igualdad o los derechos que por siempre han estado olvidados por la mayoría en las relaciones de poder.

Concluye afirmando que en el campo se requiere un cambio en las relaciones de poder y la institucionalidad en este momento está en grado de respaldarlo y, el ordenamiento jurídico estamos desde el Ministerio de Justicia en capacidad no solamente de hacerlo efectivo, sino de contribuir en la elaboración y la conformación de un mejor futuro de nuestros campesinos y campesinas.

Interviene de manera virtual en ese momento el profesor **JUAN FELIPE RODRÍGUEZ**, catedrático del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Humanas y de Artes de la Universidad del Tolima. En primer lugar, manifiesta que efectivamente el PAL que cursa para la modificación del artículo en la Constitución, es el paso a seguir para la creación de una jurisdicción como es el caso de la Jurisdicción Agraria. Es decir, la vía idónea si es la reforma por Acto Legislativo.

Indica que es igualmente plausible que con este Acto Legislativo se busca saldar una deuda histórica como se ha dicho anteriormente, una deuda histórica con el campesinado, de eso no hay duda. Señala que -desde su postura- muchos espacios ha determinado que es necesario la creación de una justicia ambiental y agraria, ya que las problemáticas como son la definición de la frontera agrícola, el rol del campesinado en las áreas protegidas y también la crisis climática y todo lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático, es necesario que sea asumido por una Corte o Tribunales de corte ambiental y agraria. Indica que esto no es una casualidad, pues en nuestra propia institucionalidad vemos como la Procuraduría tiene una delegada que se llama precisamente así: Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales Agrarios.

Igualmente manifiesta que la jurisdicción que se vaya a crear debe tener un enfoque territorial, un enfoque regional, pues no se puede seguir cayendo en la idea que los conflictos ambientales y los conflictos agrarios se manejen desde Bogotá. Por lo menos, debe haber una primera instancia que se resuelva en las regiones, que haya tribunales regionales, que sea una justicia autónoma pero descentralizada. En esa medida, la Universidad del Tolima hace el llamado al Congreso de la República, en este caso a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para que se incluya el componente ambiental, con el fin de no caer en un Acto Legislativo que pueda resultar reduccionista, únicamente desde la óptica agraria. Que se amplíe este PAL y se incluya el tema ambiental, un tema que es de todos y que es determinante para las situaciones agrícolas.

A continuación, interviene de manera virtual el señor **JOSÉ ÁNGEL BOHÓRQUEZ (presidente ANUC-SUCRE),** señaló que considera relevante e importante la Jurisdicción Especial; y que eso mismo han propuesto a través de un referendo nacional campesino.

Consideran que es muy importante el escenario para lograr que los campesinos y las campesinas puedan tener reconocimiento como sujetos de derechos a nivel constitucional. Esa es su observación, es su propuesta y manifiesta que si existe un mecanismo para hacer llegar los elementos que están planteados en el Referendo Nacional Campesino lo remitirán.

Interviene virtualmente el señor **SERGIO ALBERTO BUSTOS**, también de ANUC quien manifiesta que va a radicar por escrito sus comentarios, los cuales corresponden a lo señalado por su compañero José Bohórquez, y que obedecen al estudio del PAL que se discute en la audiencia.

Resalta que se vea con importancia el enfoque de género, el acceso equitativo a la tierra entre hombres y mujeres y también el reconocimiento del campesinado como actor político y de especial protección de derechos. Manifiestan que desde su Junta Directiva Nacional se emitió a la opinión pública una declaración política respecto a la actualidad en cuanto a las acciones que se han venido manejando por el actual gobierno y el cual por primera vez en la historia de Colombia llega al poder un gobierno de movimiento progresista y que de una u otra manera es una conquista de tipo electoral e institucional que ha sido fruto del apoyo de millones de colombianos más que todo y del compromiso y la lucha de los sectores populares del campo y la ruralidad.

También se radicará ese pronunciamiento y comparte que esperan como no es un ejercicio nuevo, sino que ha sucedido en un contexto histórico, creen importante que no se generen o se unan más las frustraciones o expectativas que se han creado en los últimos años porque es una acción que puede representar parte de la construcción del reconocimiento al campesinado y puede ser parte de un escenario de una verdadera justicia en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz.

Reafirman su apoyo al Gobierno liderado por el compañero presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez y de todas las acciones que se den en reformas constitucionales y las iniciativas que contribuyan a un país más equitativo. Llaman a las comunidades para evitar las vías de hecho y que no se generen las denominadas invasiones.

Interviene presencialmente en nombre del Grupo de Investigación de Estudios Campesinos del Sumapaz el señor **FABIÁN RICARDO BRICEÑO**, quien expresa que esta iniciativa es un grato llamado a poder superar el saldo histórico que actualmente existe y que no solamente se evidencia en los conflictos que se presentan en el norte del Cauca sino que la evidencia de las dificultades que actualmente tiene la institución agraria es uno de los grandes elementos que debemos pensar como país y poder garantizar para que las instancias judiciales y las instancias especializadas puedan verdaderamente darle un trato a los diferentes tipos de conflictos y situaciones en términos de verificación sobre la titularidad o el derecho que tienen los diferentes sujetos sobre la ocupación, posesión o los diferentes tipos de relaciones jurídicas que existen sobre el predio.

Igualmente consideran que es fundamental el ejercicio de la voluntad política pues nada vale construir la jurisdicción agraria, poder darle trámite y posteriormente avanzar en los diferentes medios jurídicos en términos de su aprobación sino existe la voluntad política. Lo anterior toda vez que la jurisdicción agraria requiere dientes en términos de la municipalidad, no vale nada si actualmente el campesinado no puede acceder dentro de sus cascos urbanos a presentar sus solicitudes sobre algún tipo de situación o conflicto que se presente sobre su relación con el conflicto de tenencia, porque si lo llevamos solamente estamos otra vez generando barreras de acceso.

Para lograr lo anterior se requiere presupuesto, también un tema específico en el tema del fortalecimiento del conocimiento en las diferentes Universidades donde el derecho agrario es marginal. Por último, destaca que la promoción es un aspecto muy relevante ya que gran parte de la población campesina y rural actualmente tiene desconfianza sobre el Estado, desconfianza sobre el tema que verdaderamente pueda garantizar o ayudar a solucionar sus problemas con la tenencia de la tierra.

Entonces tienen inquietud respecto a los términos del acceso y proponen ver cómo se puede fortalecer un andamiaje institucional que mejore la confianza del campesinado y los diferentes sujetos rurales en términos de la presencia de los diferentes municipios

Concluye que es muy importante garantizar un verdadero proceso de articulación con la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, y los jueces promiscuos que actualmente están en los municipios y claramente se requiere construir un mecanismo que garantice esa adecuada articulación y efectivamente cómo se va a tramitar esa competencia en términos de la resolución sobre el tema de los conflictos de tenencia.

Prosigue la intervención presencial del señor Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, **OMAR FRANCO**, quien desea reafirmar el planteamiento del Ministerio de Justicia y por supuesto como Ministerio de Agricultura, la implementación de la jurisdicción agraria, so pena que las conclusiones de esta audiencia y otros paneles académicos enriquezcan el debate del mismo.

Resalta la necesidad que a través de este proceso se reafirme y se cumpla el mandato constitucional que dio el Acuerdo de Paz a todos los colombianos incluyendo por supuesto en lo que tiene que ver con la reforma rural integral y creen que para que haya esa reforma rural integral se necesita también elementos que como este pueden dar la seguridad jurídica que se necesita para estos campesinos y campesinas, y por supuesto toda la visión etnocultural señalada por el profesor de la Universidad Nacional. Igualmente es importante honrar ese compromiso en términos claros.

La jurisdicción agraria tiene una condición y es que busca dar justicia en el campo y seguridad a cada uno de los actores de esta condición de propiedad y tenencia de la tierra los cuales representan un gran problema y una dificultad sustancial en el desarrollo de las comunidades y los territorios en el país.

Señala que se debe buscar un método ágil, y expedito que permita que los agricultores, y los campesinos y campesinas de este país tengan la posibilidad de acceder rápidamente a resolver sus dificultades o por lo menos brindarse la oportunidad de tener seguridad jurídica necesaria.

También señala que con una adecuada cobertura podría dársele la mano a estos actores y que puedan entendiendo su dinámica cultural, su cosmovisión en el territorio tengan acceso a la misma, también seguridad jurídica y también cada variable de las que han sido señaladas en la audiencia.

Destaca que el martes 27 de septiembre se aprobó en primer debate en la Comisión Primera de Senado con el acompañamiento del Ministerio de Interior, el Proyecto de Acto Legislativo que busca reconocer al campesinado como sujeto de protección especial y da lugar a que la respuesta del gobierno en cómo y de qué manera se pueden cumplir los preceptos constitucionales de proteger a los campesinos y campesinas del país con todos los derechos que se tienen.

La siguiente intervención presencial es del doctor **GUSTAVO ADOLFO GUERRERO**, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios manifiesta que este PAL es muy relevante para el Ministerio Público por cuanto la actual Procuradora General de la Nación cuando se desempeñó como Ministra de Justicia impulsó la iniciativa que en su momento se gestó para una propuesta de creación de jurisdicción agraria y luego fue enriquecida por parte del Consejo de Estado de una manera muy acertada agregando un elemento fundamental y fue abordar los asuntos ambientales.

En ese sentido, indica que la Procuraduría considera que el abordaje en una jurisdicción especializada efectivamente debe consagrar los asuntos ambientales y agrarios como asuntos inescindibles y de ello da cuenta la experiencia que tiene la Procuraduría General de la Nación ya que a partir de la consagración en la Ley 99 de 1993 la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales como cabeza del Ministerio Público para asuntos ambientales y garante de las funciones que le atribuye la Constitución Política en el numeral 4 del artículo 277 al Procurador General de la Nación en términos de la garantía de los intereses colectivos y especialmente del derecho a gozar de un ambiente sano.

También hay que tener presente que la creación de la jurisdicción agraria permite el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo Final, pero también permitiría la realización de ese derecho de acceso a la justicia ambiental que está consagrado no a partir del acuerdo de Escazú, sino que está planteado desde el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro.

La siguiente intervención es de la subdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras, doctora **AURA PATRICIA BOLÍVAR,** quien presencialmente señala que presentará algunos comentarios sobre el PAL, para lo cual dividirá su participación en 4 momentos:

**1.** Es una realidad que en Colombia históricamente se han hecho distintos esfuerzos normativos encaminados a la implementación de una justicia agraria y a la fecha no se ha logrado llegar a dicho cometido. Estos intentos se plasmaron en la exposición de motivos en la cual se hace un recuento desde la Ley 200 de 1936 hasta la implementación del Decreto 2303 de 1989 que se constituye como primer intento comprensivo de una jurisdicción agraria y en todo caso ninguno de estos intentos llegó a la creación de una justicia agraria y rural para el país.

Desde la Unidad de Restitución de Tierras apoyan plenamente el PAL entendiendo que hay una deuda histórica institucional en el cumplimiento y en la creación de una justicia agraria que logre resolver la conflictividad de los distintos conflictos sobre la tierra tenencia, ocio y demás que se presentan en zonas rurales.

**2.** En el marco de ese primer ejercicio este PAL implica un paso en el cumplimiento del Acuerdo de la Habana, del punto 1 específicamente, que ordena crear la jurisdicción agraria pero no solo ordena crear la jurisdicción agraria, sino que si se revisa minuciosamente ese primer punto del acuerdo hay también una apuesta para fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el área rural y buscar un acceso a la justicia en el campo a todos los sujetos de la ruralidad.

Con esto lo que se quiere hacer es una reflexión estructural para que sea tenido en cuenta por el Ministerio de Justicia, y es buscar el acceso a la justicia desde abajo, ya que usualmente cuando se hacen discusiones sobre jurisdicciones, especialidades y demás, se centran en las altas cortes, los tribunales, los magistrados y se olvida que realmente el acceso a la justicia se garantiza es desde abajo y lo que se debería hacer es garantizarle a todas las personas en Colombia que desde el juez promiscuo municipal se va a tener una salida a su problema. Esto no se da en el país por regla general y menos en las conflictividades rurales. Se debe procurar un fortalecimiento de la justicia desde los jueces en territorio, implicará articular con otros jueces como los de paz, con otras fórmulas de arreglo institucional que pasan también por los MASC.

**3.** También manifiesta que vale la pena reiterar algunos de los argumentos que presentó la comisión redactora del Decreto 2303 de 1989 en relación con la importancia de una jurisdicción agraria que logre simplificar trámites de procesos agrarios, que garantice la justicia en el campo, que permita la afirmación de la autonomía del derecho agrario, mayor eficiencia en resolución de conflictos agrarios, estructuras flexibles que permitan tener el enfoque territorial y no una visión en la que se crea que los conflictos se solucionan igual en todos los territorios del país, que fortalezca el sistema oral, entre otros.

**4.** En cuanto a la propuesta de la jurisdicción agraria y ambiental indica que esa discusión se había dado anteriormente con los otros proyectos que se presentaron sobre especialidad agraria y que es un tema que no se debe agotar en una sola audiencia y se debe precisar y adicionalmente considera que, no necesariamente es una buena idea sumarle a la jurisdicción agraria el componente ambiental ya que debe pensar en una buena fórmula de conflictos rurales y agrarios que permitan solucionar conflictos ambientales en determinados eventos y no cargarle a la justicia rural y agraria todo el tema ambiental y se desnaturalizaría la propuesta y perder el esfuerzo que se quiere tener. Debería apostarse por una jurisdicción robusta agraria y rural que llegue al territorio y que garantice la justicia desde abajo permitiendo resolver asuntos ambientales cuando se necesite.

Sigue la participación virtual de la Comisión Colombiana de Juristas, **SIBELYS MEJÍA**, quien reitera los esfuerzos que históricamente se han hecho para tratar de crear una jurisdicción o una especialidad agraria, sin obtener el resultado esperado.

De este proceso, destaca que las estrategias de administración de justicia en materia de propiedad y conflictos rurales y agrarios son una herramienta que aportaría la paz y estabilidad a los acuerdos de paz en tanto que la creación de la jurisdicción es un compromiso reafirmado en el Acuerdo Final.

Igualmente, señala como recomendación que este trámite y esta discusión se den en articulación con el trámite de los proyectos de ley de ratificación del Acuerdo de Escazú y el del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos ya que en su conjunto pueden contribuir en el aumento de los estándares de protección y nutren las herramientas para el ejercicio de defender derechos y para proteger a los líderes y defensores de derechos humanos y de asuntos ambientales. Considera que el Proyecto también acierta en mantener un régimen transicional

Se continúa con la participación de manera presencial del Director Ejecutivo de la Asociación Campesina Unión Nacional de Integración Rural – ASUNIR, señor **GUILLERMO ANTONIO PÉREZ**, quien considera que el estar discutiendo un proyecto de jurisdicción agraria no corresponde a un capricho del campesinado sino a un acto de justicia frente a años de segregación y de exclusión de los campesinos y de todos los sujetos socioterritoriales y etno-territoriales que habitan el país.

Celebran la voluntad política del Gobierno Nacional y del Congreso para comenzar a legislar a favor de un sujeto social que históricamente no ha sido tenido en cuenta en la vida política del país y en el régimen constitucional. Es así como consideran que el país estaba en mora de iniciar este tipo de debates y discusiones y sobre todo reconocer al campesinado como un sujeto social susceptible de derechos políticos.

Como recomendaciones expresan que están de acuerdo con la posición de la Procuraduría General de la Nación y con otros expositores que proponen que también se incluya el eje ambiental, para que sea una jurisdicción agraria y ambiental porque muchos conflictos tienen ese componente y es fundamental para la preservación de los ecosistemas y garantizar una sana convivencia del humano con las otras formas de vida no humana que habitan los territorios y eso es realmente importante.

Les preocupa cómo esta jurisdicción agraria se va a coordinar con todas las reclamaciones que ya están en la jurisdicción ordinaria, porque hay bastantes peticiones del campesinado actualmente. Entonces la recomendación sería que todas esas reclamaciones que ya están en la jurisdicción ordinaria sean conocidas por la jurisdicción agraria. También reconocen y solicitan que se tengan en cuenta todas las propuestas que el campesinado a lo largo de sus luchas históricas ha hecho.

Por lo que exige que todo el componente de justicia que la Cumbre Agraria presentó al gobierno sea incluido en el PAL.

Igualmente señala la profundización de la democracia en los territorios y tiene que ver con que la jurisdicción agraria y el Estado reconozcan las formas autónomas de gobierno que se han ido creando a través de la historia y las luchas sociales que los movimientos campesinos y los otros sujetos que habitan la ruralidad han ejercido como la jurisdicción especial indígena, la justicia de los pueblos afro, los mecanismos de los pueblos afro y también que el campesinado ha ido construyendo como la guardia campesina y la guardia cimarrona.

Esa justicia propia de los campesinos ha permitido la convivencia pacífica en los territorios pese a las fricciones que el conflicto armado y la desatención del Estado han generado.

Participa de manera presencial en nombre del Centro de Pensamiento y Diálogo Político el doctor **JUAN MANUEL GÓMEZ**, institución creada por el Acuerdo de Paz para garantizar la reincorporación política o por lo menos le apuesta a garantizar esa reincorporación a pesar de las dificultades que se han tenido.

Señala que en el marco de sus actividades han hecho varios documentos, informes, análisis sobre la implementación del Acuerdo y se han podido dar cuenta de la falta de voluntad política del anterior gobierno y celebran el cambio político e institucional en el que están inmersos.

Indica que la jurisdicción agraria y rural es uno de los mecanismos contemplados en el acuerdo de paz para atender las conflictividades surgidas producto de la diferencia y la inequidad en la propiedad de la tierra y de las propias lógicas territoriales y las diferentes formas de producción y de convivencia con el entorno y con el territorio.

La jurisdicción entonces deberá ser un mecanismo que garantice una progresividad en el derecho agrario que saque la conflictividad de la lógica civilista de protección al latifundista, a la propiedad privada, para emitir una mayor protección del pequeño campesino o aquellos que tengan tierra insuficiente.

Por lo anterior, considera que se debe conservar el espíritu de la reforma constitucional tal y como fue contemplada en el Acuerdo de Paz, es decir, la creación de la Jurisdicción como tal mas no de la especialidad porque precisamente lo que pretende la jurisdicción es revestir de herramientas jurídicas al conjunto de transformaciones estructurales del territorio contempladas en el punto 1 y que sin esa jurisdicción por lo tanto quedan sin la especificidad de las herramientas que en temas jurídicos y procedimentales deberán tener los jueces y tribunales para todos los niveles.

Comparte la propuesta que no se deben atender las Cortes y los Tribunales sino iniciando desde las bases del proceso jurídico para que en todos sus niveles la jurisdicción pueda proteger al pequeño campesino o campesina.

Les preocupa los tiempos para el trámite del PAL, por lo que considera que es muy importante la audiencia para generar los mecanismos de participación y acompañado a esta audiencia la celeridad para la radicación de la ponencia y del PAL para que surta el trámite correspondiente.

Participa presencialmente la Corporación Jurídica Yira Castro, representada a través de **DIANA LUCÍA ALDANA**, quien manifiesta estar de acuerdo con el PAL por considerarlo un compromiso y una deuda derivada no solo del Acuerdo de Paz sino de las reivindicaciones históricas del campesinado en el país.

Considera que el PAL sienta las bases para el posterior establecimiento y regulación de una jurisdicción agraria que tenga la envergadura necesaria para dirimir los conflictos rurales existentes e históricos del campo colombiano dándole la misma importancia y rango de otras jurisdicciones existentes, reconociendo la especificidad de los conflictos de orden rural y agrario y la posibilidad de establecer principios rectores diferenciados.

Destaca que el PAL permite crear como jurisdicción y no como especialidad un órgano de cierre y que se denomina para el caso la Corte Agraria y Rural como máximo tribunal, lo que permitirá no solo la independencia judicial sino el establecimiento de criterios procesales y sustanciales diferentes que permitan flexibilidad y amplitud que es lo que requiere los procesos y los conflictos agrarios.

Existen implicaciones adicionales para avanzar con el PAL, se encuentra que hay un balance positivo si se pondera la necesidad de la existencia de una jurisdicción y uno una especialidad ya que la jurisdicción podrá solventar la gran cantidad de conflictos agrarios existentes en un país con la extensión territorial como el nuestro, además de resultar un proyecto competente con el texto constitucional.

En la actualidad los conflictos agrarios de este orden son sometidos a la Jurisdicción Civil que se guía por principios rectores y normas que no logran abarcar la totalidad de los conflictos agrarios, y no se les da la relevancia que les corresponde a otros principios constitucionales como el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, importancia producción de alimentos en áreas agropecuarias, entre otros.

En la experiencia de la Corporación en el litigio de casos que son del orden agrario pero que al no existir esta jurisdicción son llevados por el área de la jurisdicción civil, se encuentra muy difícil el reconocimiento de ciertos criterios que identifican situaciones materiales diferenciados porque ante esta jurisdicción se ponen como iguales propietarios de la tierra, empresarios, entre otros, y se les iguala materialmente a campesinado y comunidades étnicas o afro. Es el caso de las comunidades del municipio de Nilo aledañas a la base de Tolemaida en donde se tiene un enfrentamiento por procesos reivindicatorios que intentan el Ministerio de Defensa contra la comunidad campesina que ha habitado en estos territorios durante más de cien años y ante esta jurisdicción pues se les trata como si fueran iguales materialmente.

Otro punto que se destaca es que en la jurisdicción civil no se tiene el conocimiento técnico y de instrumentos específicos que se requiere para la toma de decisiones en la materia agraria pues solo se tiene el recurso de llamar especialistas y peritos, pero no se tiene una visión que guíe a esa jurisdicción a una justicia agraria.

Concluye señalando que la materialización por medio del PAL es un compromiso derivado del Acuerdo de Paz que no son solo compromisos que está llamado a cumplir el Gobierno y también las demás entidades incluida también el poder legislativo por lo que estiman que es absolutamente procedente esta iniciativa y creen que está además directamente en cumplimiento de la orden 15 de lo que se conoce hasta el momento del comunicado de la sentencia SU-288 de 2022 en el que se ordena la creación de la jurisdicción agraria y otros compromisos como la creación del catastro multipropósito, entre otros.

Hace su intervención presencial el profesor **JOSÉ ALFONSO VALBUENA LEGUIZAMO** de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, quien manifiesta que a partir de su experiencia profesional y académica se estaba esperando esa jurisdicción hace mucho tiempo, y no se está apostando a esa especialidad.

Señala que se debe ser muy cautelosos si se desea que se trate de una jurisdicción agro-ambiental. Considera que se trata es más de una jurisdicción para el derecho agrario, que no es el espacio del derecho civil, que es el espacio

Continúa su intervención la Senadora **ISABEL ZULETA**, quien como autora del proyecto no quiere entender junto con sus otros compañeros que esta audiencia sea para dilatar el proceso. Por eso reitera que es muy urgente que la Comisión Primera de la Cámara entienda los tiempos y la situación en la que se está.

Indica que se han hecho muchas audiencias en los territorios, en medio de las mingas, en donde se estructuró el PAL y por eso tiene absoluto respaldo popular, viene de los territorios rurales.

Manifiesta que la decisión de pasar el proyecto por la Cámara no fue en vano porque la Cámara es de las mayorías de las regiones y por eso es muy importante que se recuerde que un PAL no se puede discutir en sesiones extraordinarias y ese no es un asunto menor toda vez que ya estamos sobre el tiempo. Sino se radica la ponencia esta semana no se alcanzará y hace un llamado angustioso para que por favor ayuden a que la ponencia se radique esta misma semana. Si se radica el lunes no se alcanzan los tiempos.

Explica que la deuda histórica no es solo del ejecutivo, sino que es del legislativo y que comienza en 1936 cuando la Ley 200 crea los jueces de tierras y luego la Ley 4ª de 1943 elimina los jueces de tierras y los casos y competencias pasaron a los jueces civiles.

Señala que en la Ley 4ª de 1973 se crea una sala especializada en la Corte Suprema de Justicia pero nunca fue implementada. Posteriormente en 1987 la Ley 30 concede facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para reformar la justicia y crear una jurisdicción agraria.

Luego en el Decreto Ley 2303 de 1989 se organizó la Jurisdicción agraria en Colombia, y la Ley 270 de 1996 estableció que los juzgados agrarios harían parte de la jurisdicción ordinaria, pero suspendió su funcionamiento hasta tanto entraran a funcionar en todo el territorio nacional.

La Ley 1285 de 2009 modificó la Ley estatutaria de Administración de Justicia, eliminó la referencia a los jueces agrarios y la Ley 1564 de 2012 derogó el Decreto Ley 2303 de 1989.

Manifiesta que la Ley 1448 de 2011 creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y creó los Juzgados de Restitución de Tierras.

Destaca que varios países de América Latina han adoptado sistemas de jurisdicción agraria como: Argentina, Chile, Brasil, México, Panamá, Ecuador, Perú y Costa Rica.

Es así como señala que el Congreso también tiene una deuda histórica con el campo colombiano, por eso el proyecto no es solo agrario sino rural porque avanza en los usos del suelo y considera que no es pertinente incluir la especialidad ambiental en el mismo porque se podría perder el esfuerzo.

Interviene virtualmente ahora del vocero ACIT – Mesa Campesina Cauca, representada por el señor **ELIECER MORALES POLANCO**, señala que este PAL es una reivindicación solicitada por parte del movimiento campesino organizado.

Como primera conclusión no habría duda sobre la legitimidad del PAL y espera que sea aprobado por el Congreso de la República. Reiteran que la jurisdicción rural debe hacer parte del cambio, señala que debe ser una jurisdicción y no una especialidad y de alguna manera y una vez salga la ley estatutaria no debe quedarse en un tema de definir o de hablar solamente sobre los derechos reales de propiedad porque es una visión muy limitada. Espera que el proyecto pueda salir en los tiempos que son.

Quisiera que se incluyan unas apreciaciones más concretas y contundentes en la motivación la cual servirá para la Ley Estatutaria.

Ahora interviene de manera presencial el director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho de la Universidad Javeriana, **JUAN FELIPE GARCÍA**, se vuelve a pronunciar frente a los antecedentes históricos de la lucha por la tierra desde los años 30 en donde la tierra era de quien la trabajara y eso generó que el que tuviese más fuerza el gobierno le formalizara.

Entonces existía un conflicto del derecho agrario, ese mismo problema en lo laboral se solucionó con jueces y se creó la jurisdicción laboral pero del derecho agrario no se creó dicha especialidad.

En los años 60 se pensó en tener una institucionalidad administrativa con mucho músculo, y se crea el INCORA para que sea la administración, el ejecutivo el que resuelva esos conflictos y esa reforma fue suspendida y también se bloqueó. Lo que se aprendió es que era fundamental darle vida a una jurisdicción.

Luego en los 80 se vuelve a pensar en la posibilidad de la Jurisdicción como fórmula de resolución de los conflictos, eso también se bloqueó y también se murió. Eso derivó en un proceso de acaparamiento feroz de tierras por parte de agentes no necesariamente legales y eso generó un problema de uso del suelo.

Hoy los conflictos son agrarios y de formalización, pero también sobre el uso, cada vez hay demandas más hondas y profundas de autonomía territorial.

Le solicita a la Comisión que se llegue al consenso y que se cumplan los compromisos ya que el Estado le ha venido incumpliendo al campesinado, no se puede seguir incumpliendo el pacto que se adelantó en la Habana. Se debería llamar Jurisdicción de Resolución de Conflictos Territoriales en lo Rural y se reitera que su espíritu es derivado de los acuerdos de paz.

No se le debe tener miedo a la competencia amplia de asuntos, se debe recordar que las jurisdicciones actuales están consolidadas hay que ver en los años 30 todos los trámites se hacían por lo civil y se vio que no era la civil la mejor opción.

Ahora interviene presencialmente la Corporación para la Protección y Desarrollo de los Territorios Rurales, a cargo de **JENNIFER MOJICA**, quien llama la atención para que se tramite oportunamente el PAL toda vez que es el camino correcto para saldar la deuda histórica.

Señala el compromiso incluido en el Acuerdo Final de Paz frente a la Jurisdicción Agraria la cual se constituiría como un mecanismo de paz para el campo.

También manifiesta que sería un error mantener la idea de solo una especialidad y no una jurisdicción por tres motivos: **(i)** porque muchos de los argumentos que han justificado antes en tramitar el Proyecto de Ley de ley son falacias, primero se dijo que era más rápido hacer la especialidad y se dejó pasar tiempo sin hacerse; Se debe aprovechar el cambio de gobierno **(ii)** Se dijo que no se podía hacer jurisdicción porque era muy costoso y eso no es cierto, la diferencia no es mayúscula pero si arruina la posibilidad cumplir los compromisos; y **(iii)** la anomalía en el sistema que genera tener esas especialidades porque no va a haber una Corte de cierre, por ejemplo.

Lo agrario es todo, es lo diverso, lo multicultural, lo de bienes de uso público, y con una Alta Corte que ayude a resolver estos problemas va a ayudar a descongestionar y a ayudar a administrar justicia oportunamente.

Ahora interviene el H. Representante **EDUARD SARMIENTO**, quien ratifica el compromiso con este propósito del Gobierno y que luego de la audiencia se evidencia la suma de gran cantidad de fuerzas para sacar el proyecto adelante.

Manifiesta que se lleva más de un siglo para tomar decisiones con este tema y que se está en un momento distinto de reconocimiento del campesinado en el ámbito cultural, social, político y que significa hoy la reivindicación con el pasado.

Hace un llamado al Congreso a priorizar el trabajo por el momento que se tiene para el trámite que se está surtiendo, es muy importante avanzar.

Finaliza la audiencia con el agradecimiento de la presidente de la sesión, H.R. Delcy Esperanza Isaza reiterando su compromiso y el de sus compañeros para llevar a buen término este Proyecto de Acto Legislativo, no van a correr sino van a actuar con responsabilidad para que en el menor tiempo posible sea una herramienta legislativa para la ruralidad.

También agradeció el H.R. Gabriel Becerra la participación de todos los intervinientes y reitera su compromiso con el proyecto y resalta la voluntad política que tiene el gobierno.

Por último, cierra la audiencia el Viceministro General del Interior agradeciendo los valiosos aportes de los participantes.

**AUDIENCIAS PÚBLICAS – PRIMER DEBATE, SEGUNDA VUELTA**

La mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional permanente de la H. Cámara de Representantes convocó a audiencia pública, el día 13 de abril de 2022 conforme las proposiciones No. 33 y 33A, presentadas por los Honorables Representantes, Gabriel Becerra Yáñez, Julio César Triana Quintero, Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, Oscar Rodrigo Campo Hurtado, Jorge Méndez Hernández, Víctor Andrés Tovar Trujillo, José Jaime Uscategui Pastrana, Hernán Darío Cadavid Márquez, James Hermenegildo Mosquera Torres, Astrid Sánchez Montes de Oca, Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, Luis Alberto Albán Urbano, Diógenes Quintero Amaya, Pedro José Suarez Vacca, Eduard Giovanny Sarmiento Hidalgo, Alirio Uribe Muñoz y Luz Marina Munera Medina.

En la intervención, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura como representante de las Altas Cortes, ratificó el compromiso de contribuir a la Justicia Agraria y Rural y ofrecer la experiencia, capacidad y recursos del sistema judicial en dirección a este propósito nacional, esperando poder exponer con mayor profundidad esta solución que, a juicio de la Rama Judicial, es la mejor opción para el país en la coyuntura actual.

Asimismo, indica que crear una jurisdicción tiene impacto fiscal pero este proyecto de acto legislativo no refleja el impacto fiscal que pueda llegar a tener.

Interviene El Ministro Néstor Iván Osuna Patiño e indica que “El gobierno nacional sigue apoyando y apoya este proyecto de acto legislativo. En cuanto al concepto fiscal, le escribí al ministro Ocampo para pedirle que ojalá nos lo expida esta semana que el próximo lunes, y, estamos a la espera.

Sé que el concepto llegará pronto, ignoro los términos específicos de cómo vendrá ese concepto, pero tengamos en cuenta lo siguiente; por supuesto que crear una jurisdicción tiene impacto fiscal pero este proyecto de acto legislativo no refleja el impacto fiscal que pueda llegar a tener, un impacto fiscal, que yo diría que, es benéfico, porque es más justicia para toda la ciudadanía.

Pero ese impacto fiscal lo sabremos cuando analicemos la ley, a mi modo de ver estatutaria, que desarrolle la jurisdicción agraria, porque allí sí tendremos que decidir cuántos juzgados, de primera instancia, dotados de qué manera; cuántos juzgados de segunda instancia, en qué lugar, de qué manera. No es lo mismo el impacto fiscal de 20 juzgados, que de 200 juzgados y eso no se puede prever desde el acto legislativo.

El Gobierno Nacional se compromete con los recursos para la ejecución de este proyecto de ley, incluso si tienen que ser recursos adicionales con los que hoy cuenta la justicia para la creación de esta jurisdicción.”

Ahora intervine el Doctor, OSCAR AMAYA VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO yseñala que hay coincidencia en las altas cortes, en que no hay necesidad de crear una corte nueva, entre otras razones porque los temas agrarios son temas de las localidades, son temas que se presentan en los municipios.

La Corte Constitucional ha dicho que Jurisdicción Agraria no está definida como una especialidad, sino como jueces en el territorio. Las coincidencias de las altas cortes son:

* No compartimos la creación de una alta corte.
* Llevar los jueces a los territorios, donde se necesitan (municipios priorizados)
* No quitarle la competencia al Consejo de Estado.

Por su parte, el Honorable Representante HERÁCLITO LANDINEZ SUAREZ indica que Colombia ha sido un país en construcción desde hace 200 años de esta república.

También manifiesta que en “El acuerdo de paz del 2016 el Estado colombiano, representado en el Gobierno Nacional, se sentó e hizo un acuerdo con un grupo insurgente, y el primer punto fue ese, el primer punto de los acuerdos con las FARC-EP fue sobre la tierra. ¿y qué ha pasado? el establecimiento, nosotros hoy que somos establecimiento las Cortes, el Congreso, los actores políticos no le hemos cumplido a la implementación de ese acuerdo y a desarrollar el punto uno y por eso cuando el presidente Gustavo Petro presentó su apuesta de Pacto Histórico que el pacto significa que todos nos pongamos de acuerdo como decía Álvaro Gómez en lo fundamental en algunos puntos como sociedad y el primero es el punto de la paz total. Construir una paz total entre todos.”

Por su parte, la Honorable Senadora ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ, hace una presentación como ambientalista popular y feminista comunitaria, víctima del mega proyecto hidroeléctrico hidroituango y defensora de derechos ambientales.

La Honorable Senadora, informa que no ha existido una jurisdicción ambiental para las situaciones que han vivido en el territorio y manifiesta: “Los pequeños mineros en este país no desean tener Tierra y su lógica es completamente distinta la lógica de un título minero que hable del subsuelo no es sobre la tenencia de la Tierra, y el suelo es otra lógica, por lo tanto desde la experiencia de ayer y los días que llevamos, y 14 años de lucha ambiental, les puedo decir que la tesis del señor ministro, la compartimos las resistencias ambientales de este país, las resistencias que hemos buscado justicia ambiental, esa tesis es cierta y nosotros ayer reclamábamos 202.200 hectáreas que nos están debiendo hace 14 años en el proyecto hidroeléctrico el quimbo. Y todas las demandas, todos los procesos, que hemos intentado acceder a la justicia no nos han devuelto esa Tierra a nosotros, tampoco en HidroItuango como en la mayoría de proyectos.

Asimismo, resalta que tesis del señor ministro no solo la comparte, sino que la avala en las calles, y la han reivindicado desde los movimientos sociales, y, ambientales.

Por su parte, el señor LUIS ALBERTO hace referencia frente a la articulación interinstitucional que debería tener el presente proyecto de acto legislativo y considera que debe haber un proceso de articulación interinstitucional entre la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. Lo anterior, debido a que el título por sí solo no significa una garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales de la población campesina.

También manifiesta que debe haber una vinculación del Ministerio de Justicia, especialmente de la Dirección Nacional de Drogas, y, el observatorio de drogas, frente al eje ambiental, de conservación ambiental y población vulnerable; “porque no puede desarticularse la Política de Drogas, de la Jurisdicción Agraria”.

Finalmente, el señor Luis Alberto consideró que “Debe haber un análisis de la sentencia SU 288 del 2022 porque la Corte Constitucional sacó esa sentencia en la que habla de la imprescriptibilidad de los baldíos y resulta que los campesinos estamos ocupando los territorios baldíos. Yo nací en Santo Domingo del Caguán, de aquí allá hay 30 horas sin descansar para poder llegar al territorio donde yo nací, sí el abandono absoluto del estado ha sido una cosa supremamente vergonzosa y esos territorios son baldíos ¿Qué nos van a hacer, nos van a sacar? yo que nací en el territorio, de una población de 400 jóvenes que ingresamos a la educación y solamente yo pude graduarme en condiciones de sufrimiento como muchos en este país.”

El Representante HERNAN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ, intervino e informó: *“Me parece muy importante que en una audiencia estemos dejando de presente un tema y es que hace más o menos 15 días pudimos tener los ponentes un desayuno con miembros de la Corte*

*Suprema de Justicia, donde hicieron unas observaciones de fondo sobre el diseño institucional de la Justicia que me parece importante. Este tema no es en vano en la intervención y es que aquí no vamos a entrar en un debate sobre si se debe dar oferta en materia de justicia agraria o no yo creo que en eso todos estamos de acuerdo creo que no es un debate sobre sí la Tierra merece dejarse clarificada en materia de titulación y claridad jurídica tampoco creo que estamos en un debate sobre eso aquí en la comisión por lo menos todos creo estar de acuerdo en eso el debate está centrado y yo creo que esta audiencia tiene que servir para eso es en el diseño institucional del instrumento de la justicia que se necesita para ello la corte suprema de justicia seguramente no hablar en función de ellos pero lo dirá la justicia el consejo de la judicatura las salas disciplinarias tienen una serie de preocupaciones sobre el diseño institucional y yo lo que he dicho a lo largo de los debates es si nos obstinamos a decir que tenemos que crear una nueva corte o una nueva sala al interior de las altas cortes pensando que eso es lo que otorga justicia lo que se puede estar creando es una nueva frustración porque no estamos llegando a donde realmente hay que llegar yo simplemente quiero dejar es que tengamos la apertura de escuchar y de conciliar con la rama judicial qué es lo que el país necesita en materia de diseño institucional que no creemos una nueva frustración en materia judicial.*

*Me dejó muy inquieto la reunión con la corte suprema de justicia al yo escuchar ellos lo podrán confirmar que no fueron tenidos en cuenta desde un principio a la hora de el plan de plantear cuál sería el mejor diseño para esta jurisdicción agraria si una especialidad si nos quedamos solamente en los tribunales y los jueces que es donde más se necesita y aun entendiendo la autonomía que tenemos como rama legislativa me parece que es muy importante conciliar esos aspectos doctora piedad simplemente eso no es motivo de debate sino de audiencia para que tengamos esa apertura a la hora de escuchar las ideas distintas a las demás ramas del poder público en Colombia”.*

1. **JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO**

La Constitución Política de 1991 establece la independencia de las ramas del poder público como uno de los pilares estructurales del estado social de Derecho.

Como ponentes de esta iniciativa apoyo de manera decidida la importancia de adecuar el diseño institucional de la rama judicial del poder público para lograr los cometidos del acuerdo de paz, en aras de lograr el derecho colectivo a una paz estable y duradera, uno de esos medios para lograr ese fin colectivo es fortalecer la especialidad agraria y rural en el componente de justicia pronta y eficaz, en busca de lograr una reparación integral a través de verdad, justicia y reparación a las víctimas y actores del conflicto armado interno en Colombia.

Ahora bien, la discusión de debe centrar en cual diseño resulto más eficaz, oportuno y pertinente bajo la premisa del respeto a las instituciones judiciales existentes.

Resulta entonces oportuno traer a colación una breve descripción del diseño institucional vigente en nuestro modelo de Estado; conforme a lo regulado por la ley estatutaria 270 de 1996 de administración de justicia, en la actualidad la Corte Suprema de Justicia tiene 5 salas y una de ellas es la sala civil y agraria; esta sala esta encargada de los litios agrarios y rurales; pero es también cierto que no existe una especialidad en dicha jurisdicción que se encargue de manera exclusiva al componente de tierras en el marco del cumplimiento del acuerdo de paz y del conflicto armado interno, pues le corresponde a los jueces civiles municipales, civiles del circuito y tribunales de distrito judicial una multiplicidad de temas lo que genera una ineficacia y mora en cuanto a la asignación de temas agrarios y rurales.

Por lo tanto, la solución más armónica resulta ser crear una Sala especial dedicada a las competencias Agrarias y rurales pero dentro de la estructura orgánica de la Corte Suprema de Justicia conforme a lo regulado en el artículo 234 de la Constitución Política, al mismo tiempo se deberá ordenar la creación de despachos y juzgados Agrarios y Rurales civiles Municipales, Civiles del Circuito y despachos de distrito judicial en calidad de tribunales Agrarios y Rurales; que se encarguen de manera exclusiva a este componente de asignación de tierras en el marco del cumplimiento del proceso de paz y del conflicto armado interno.

¿Porque resulta entonces inconveniente y problemático la creación una Alta Corte Agraria y Rural distinta a la Corte Suprema de Justicia que se encargue de esta temática?

El histórico de una institución con más de 200 años de historia constitucional a la que se le reconoce la competencia de ser el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en el artículo 234 de la constitución política. Un cambio de diseño en este sentido no sería otra cosa que una sustitución de la voluntad del constituyente de 1991.

Por tal razón cualquier reforma al diseño institucional mediante actos legislativos no pueden desconocer la historia social y cultural de las instituciones judiciales en Colombia, es vital generar un sentimiento en los ciudadanos que vigencia, arraigo y credibilidad en las instituciones judiciales; por lo que la creación de múltiples Altas Cortes genera un desapego y desconocimiento de los ciudadanos frente a las instituciones.

1. **PLIEGO DE MODIFICACIONES**

Para dar trámite al Proyecto de Acto Legislativo en la Comisión Primera de Cámara (Quinto debate acumulado), en nuestra condición de ponentes, pongo a consideración de la corporación el siguiente pliego de modificaciones:

| **Artículos aprobados en la primera vuelta del PAL** | **Modificación sugerida para la segunda vuelta del PAL** | **Explicación del cambio** |
| --- | --- | --- |
| **“Por el cual se ~~reforma la Constitución Política de Colombia y se establece~~ la jurisdicción agraria y rural”.** | **“POR EL CUAL SE DESIGNA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA COMO EL ÓRGANO DE CIERRE DE LA JUSTICIA AGRARIA Y RURAL”** | Se ajusta el título |
| **ARTÍCULO 1º.** El inciso primero del artículo 116 de la Constitución quedará así:  **ARTÍCULO 116.** La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Agraria y Rural, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. | **ARTÍCULO 1º.** El inciso primero del artículo 116 de la Constitución quedará así:  **ARTÍCULO 116.** La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de las jurisdicciones ordinaria y rural y agraria, el Consejo de Estado, ~~la Corte Agraria y Rural~~, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. | Se asigna a la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, la calidad de máximo tribunal de la jurisdicción rural y agraria, por lo que será el único órgano de cierre. |
| **ARTÍCULO 2°.** Adiciónese al Título VIII de la Constitución (De la Rama Judicial) el Capítulo III -A, "De la Jurisdicción Agraria y Rural", en los siguientes términos: (…)  **CAPÍTULO 3A. DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL** | **ARTÍCULO 2°.** Adiciónese al Título VIII de la Constitución (De la Rama Judicial) el Capítulo 2 ~~IV~~-A, "De la Jurisdicción Agraria y Rural", en los siguientes términos: (…)  **CAPÍTULO 2 ~~3~~A. DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL** | Se ajusta la ubicación del capítulo, con el fin de que la nueva jurisdicción quede de forma subsiguiente a la jurisdicción ordinaria. |
| **ARTÍCULO 238A.** La Corte Agraria y Rural es el máximo tribunal de la Jurisdicción Agraria y Rural, cuya estructura y funcionamiento será definido en la ley. Se compondrá de un número impar de magistrados, determinado por la ley, quienes para ser elegidos deberán cumplir con los requisitos, cualidades y calidades necesarias para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el Régimen Agrario y Rural. En lo demás, se regirán por las condiciones, requisitos y periodos previstos en los artículos 231, 232 y 233 de la Constitución.  La Corte Agraria y Rural reglamentarán la fórmula de votación y el término en el cual deberán elegir a los Magistrados que conformen la respectiva corporación.  Los Magistrados de la Corte Agraria y Rural están sujetos al mismo régimen y estatuto personal, disciplinario, fiscal y penal que regula a los magistrados de una alta Corporación.  PARÁGRAFO TRANSITORIO. Por una sola vez, los primeros Magistrados que hagan parte de la Corte Agraria y Rural serán elegidos por el Congreso de la República en pleno de una lista de elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, con base en una convocatoria pública a cargo de dicha autoridad administrativa, la cual será reglada de conformidad con la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección. Las personas que conformen la lista de elegibles deberán cumplir con los requisitos y calidades exigidos para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. | **ARTÍCULO 235A.** La Corte Suprema de Justicia ~~Corte Agraria y Rural~~ es el máximo tribunal de la Jurisdicción Agraria y Rural. ~~, cuya estructura y funcionamiento será definido en la ley. Se compondrá de un número impar de magistrados, determinado por la ley, quienes para ser elegidos deberán cumplir con los requisitos, cualidades y calidades necesarias para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y haber ejercido la profesión en actividades relacionadas con el Régimen Agrario y Rural. En lo demás, se regirán por las condiciones, requisitos y periodos previstos en los artículos 231, 232 y 233 de la Constitución.~~  ~~La Corte Agraria y Rural reglamentarán la fórmula de votación y el término en el cual deberán elegir a los Magistrados que conformen la respectiva corporación.~~  ~~Los Magistrados de la Corte Agraria y Rural están sujetos al mismo régimen y estatuto personal, disciplinario, fiscal y penal que regula a los magistrados de una alta Corporación.~~  ~~PARÁGRAFO TRANSITORIO. Por una sola vez, los primeros Magistrados que hagan parte de la Corte Agraria y Rural serán elegidos por el Congreso de la República en pleno de una lista de elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura, con base en una convocatoria pública a cargo de dicha autoridad administrativa, la cual será reglada de conformidad con la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección. Las personas que conformen la lista de elegibles deberán cumplir con los requisitos y calidades exigidos para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.~~ | Se ajusta numeración, conforme a la nueva ubicación del capítulo.  Se sustituye la Corte Agraria y Rural por la Corte Suprema de Justicia, por ser ésta la cabeza que se propone para la nueva jurisdicción agraria y rural.  Como ya existen normas que regulan la composición de la Corte, calidades, designación, responsabilidad y régimen disciplinario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deviene que deben suprimirse los demás incisos de este artículo. |
| **ARTÍCULO 238B.** Son funciones de la Corte Agraria y Rural:  1. Desempeñar las funciones de Tribunal Supremo y órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, conforme a las reglas que señale la ley.  2. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales que se profieran por las autoridades judiciales de la Jurisdicción Agraria y Rural.  3. Dirimir los conflictos de competencias en Jurisdicción Agraria y Rural, que no correspondan a otra autoridad judicial.  4. Preparar y presentar proyectos de ley y de actos reformatorios de la Constitución, en relación con los asuntos de su competencia.  5. Ejercer las demás funciones que determine la ley.  6. Darse su propio reglamento.  PARÁGRAFO 1º. Las anteriores funciones se ejercerán con la garantía del derecho de hombres y mujeres al acceso efectivo a la justicia, así como con la garantía de protección a los Grupos Étnicos: Comunidades Negras o Afrocolombianas, Palenquero, Raizales, Pueblos y Comunidades Indígenas, Comunidad Rom y de Víctimas. En lo que se refiere a la aplicación de la ley y su interpretación prima el principio de igualdad de los ciudadanos. | **ARTÍCULO 235~~8~~B.** Son funciones de la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción agraria y rural ~~Corte Agraria y Rural~~:  1. Desempeñar las funciones de Tribunal Supremo y órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, conforme a las reglas que señale la ley.  2. Controlar la legalidad ~~Revisar~~, en la forma que determine la ley, de las decisiones judiciales que se profieran por las autoridades judiciales de la Jurisdicción Agraria y Rural.  3. Dirimir los conflictos de competencias en la Jurisdicción Agraria y Rural, que no correspondan a otra autoridad judicial.  4. Preparar y presentar proyectos de ley y de actos reformatorios de la Constitución, en relación con los asuntos de su competencia.  5. Ejercer las demás funciones que determine la ley.  ~~6. Darse su propio reglamento.~~  PARÁGRAFO 1º. Las anteriores funciones se ejercerán con la garantía del derecho ~~de hombres y mujeres~~ al acceso efectivo a la justicia, así como con la garantía de protección a los Grupos Étnicos: Comunidades Negras o Afrocolombianas, Palenquero, Raizales, Pueblos y Comunidades Indígenas, Comunidad Rom y de Víctimas. En lo que se refiere a la aplicación de la ley y su interpretación prima el principio de igualdad de los ciudadanos. | Se ajusta numeración, conforme a la nueva ubicación propuesta para el capítulo.  Se ajusta la redacción para denotar que estas nuevas funciones serán cumplidas por la Corte Suprema de Justicia.  Se sustituye el verbo “revisar” por “controlar la legalidad”, para evitar que se entienda que el único recurso que conocerá la Corte Suprema de Justicia es el “extraordinario de **revisión**”.  Se elimina el numeral 6°, por ser una reiteración del numeral 9° del artículo 235 de la Constitución Política.  Se elimina la mención a hombres y mujeres para evitar interpretaciones restrictivas. |
| **ARTÍCULO 3°.** Modifíquese el artículo 156 de la Constitución Política, el cual quedará así:  **ARTÍCULO 156.** La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Agraria y Rural, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. | **~~ARTÍCULO 3°.~~** ~~Modifíquese el artículo 156 de la Constitución Política, el cual quedará así:~~  **~~ARTÍCULO 156.~~** ~~La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Agraria y Rural, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.~~ | Se elimina, no resulta necesario introducir modificaciones en el artículo 156 de la Constitución Política. |
| **ARTÍCULO 4°.** El artículo 238 de la Constitución Política quedará así:  **ARTÍCULO 238.** La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Jurisdicción Agraria y Rural podrán suspender provisionalmente, en los asuntos que sean de su competencia, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. | **ARTÍCULO 3°.** El artículo 238 de la Constitución Política quedará así:  **ARTÍCULO 238.** La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Jurisdicción Agraria y Rural podrán suspender provisionalmente, en los asuntos que sean de su competencia, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. | Se ajusta numeración, por la supresión del artículo precedente.  Se mantiene inalterado el texto del artículo 238. |
| **ARTÍCULO 5°.** La Jurisdicción Agraria y Rural entrará a funcionar en un término no superior a dos (2) años siguientes a la promulgación de este acto legislativo. Su implementación será progresiva, durante los dos años y mientras entra en funcionamiento en todo el territorio nacional, se podrá adoptar un régimen de transición en los términos y condiciones que defina la ley.  PARÁGRAFO 1º. El Gobierno Nacional deberá agotar la consulta previa con los pueblos indígenas para emitir un decreto en el que se articule la Jurisdicción Rural y Agraria con la Jurisdicción Especial e Indígena, de suerte que se respete la autonomía y gobierno propio de los pueblos y comunidades en esta jurisdicción y en el régimen de transición.  PARÁGRAFO TRANSITORIO. Dentro de los (6) meses posteriores a la promulgación de este acto legislativo, el Consejo Superior de la Judicatura, formará, capacitará y reasignará jueces especializados con carácter temporal en la Jurisdicción Ordinaria y de lo Contencioso Administrativo para resolver conflictos rurales y agrarios en todo el territorio nacional, hasta la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural. | **ARTÍCULO 4°.** La Jurisdicción Agraria y Rural entrará a funcionar en un término no superior a dos (2) años siguientes a la promulgación de este acto legislativo. Su implementación será progresiva, durante los dos años y mientras entra en funcionamiento en todo el territorio nacional, se podrá adoptar un régimen de transición en los términos y condiciones que defina la ley.  PARÁGRAFO 1º. El Gobierno Nacional deberá agotar la consulta previa con los pueblos indígenas para emitir un decreto en el que se articule la Jurisdicción Rural y Agraria con la Jurisdicción Especial e Indígena, de suerte que se respete la autonomía y gobierno propio de los pueblos y comunidades en esta jurisdicción y en el régimen de transición.  PARÁGRAFO TRANSITORIO. Dentro de los (6) meses posteriores a la promulgación de este acto legislativo, el Consejo Superior de la Judicatura, formará, capacitará y reasignará jueces especializados con carácter temporal en la Jurisdicción Ordinaria y de lo Contencioso Administrativo para resolver conflictos rurales y agrarios en todo el territorio nacional, hasta la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural. | Se ajusta numeración, por la supresión de artículo anterior.  En lo demás se mantiene inalterado el texto. |
| **ARTÍCULO 6º.** El Congreso de la República tramitará y expedirá en la siguiente legislatura la ley por medio del cual se establezca la estructura, funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, así como el Procedimiento Especial Agrario y Rural. | **ARTÍCULO 5°.** El Congreso de la República tramitará y expedirá en la siguiente legislatura la ley por medio del cual se establezca la estructura, funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, así como el Procedimiento Especial Agrario y Rural. | Se ajusta numeración, por la supresión de artículo anterior. |
| **ARTÍCULO 7º.** Vigencia ~~y armonización. Inclúyase la expresión "Corte Agraria y Rural" en los artículos 126, 174, 178,197,231,232 y 233 de la Constitución Política de Colombia.~~ | **ARTÍCULO 6°. Vigencia.** El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación. | No hace innecesario introducir las modificaciones a estos artículos constitucionales. |

1. **CONFLICTO DE INTERÉS**

Con base en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, según el cual el autor del proyecto y los ponentes presentan en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describe las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar.

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función congresional, entre ellas la legislativa.

“Artículo 1º. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así: (…)

***a)*** *Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.*

***b)*** *Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.*

***c)*** *Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.*

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

*a. Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.*

*b. Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.*

*c. Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.*

*d. Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.*

*e. Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.*

*f. Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos (...)”.*

De lo anterior y de manera meramente orientativa, se considera que para la discusión y aprobación de este Proyecto de Ley no existen circunstancias que pudieran dar lugar a un eventual conflicto de interés por parte de los Honorables Congresistas, pues es una iniciativa de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual. En suma, se considera que este proyecto se enmarca en lo dispuesto por el literal a del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés.

En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada Congresista evaluarlos, pudiendo manifestar cuando considere que está inmerso en impedimento.

1. **PROPOSICIÓN**

En relación con los puntos anteriormente expuestos y dada la importancia que esta iniciativa legislativa reviste, presentamos ponencia positiva y solicitamos a los honorables miembros de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes debatir y aprobar en primer debate, segunda vuelta del Proyecto de Acto Legislativo 173 de 2022 Cámara y 035 de 2022 Senado “Por el cual se reforma la Constitución Política de Colombia y se establece la Jurisdicción Agraria y Rural” conforme al texto propuesto.

Cordialmente,

**HR. HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ H.R. MARELEN CASTILLO TORRES**

**PONENTE PONENTE**

**HR. ADRIANA CAROLINA ARBELAEZ H.R. GABRIEL BECERRA YAÑEZ**

**PONENTE PONENTE**

**H.R. ALVARO LEONEL RUEDA C. H.R. DELCY ESPERANZA ISAZA B.**

**PONENTE PONENTE**

**H.R. ORLANDO CASTILLO ADVINCULA H.R. ASTRID SANCHEZ MONTES**

**PONENTE PONENTE**

**HR. SANTIAFO OSORIO MARÍN H.R. LUIS ALBERTO ALBÁN**

**PONENTE PONENTE**

**TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE, SEGUNDA VUELTA AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 173 de 2022 CÁMARA - 035 DE 2022 SENADO**

**“POR EL CUAL SE DESIGNA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA COMO EL ÓRGANO DE CIERRE DE LA JUSTICIA AGRARIA Y RURAL”**

**EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

**DECRETA:**

**ARTÍCULO 1º.** El inciso primero del artículo 116 de la Constitución quedará así:

**ARTÍCULO 116.** La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de las jurisdicciones ordinaria y rural y agraria, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

**ARTÍCULO 2°.** Adiciónese al Título VIII de la Constitución (De la Rama Judicial) el Capítulo 2 -A, "De la Jurisdicción Agraria y Rural", en los siguientes términos: (…)

**CAPÍTULO 2 A. DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL**

**ARTÍCULO 235A.** La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la Jurisdicción Agraria y Rural.

**ARTÍCULO 235B.** Son funciones de la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción agraria y rural:

* + - 1. Desempeñar las funciones de Tribunal Supremo y órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural, conforme a las reglas que señale la ley.
      2. Controlar la legalidad, en la forma que determine la ley, de las decisiones judiciales que se profieran por las autoridades judiciales de la Jurisdicción Agraria y Rural.
      3. Dirimir los conflictos de competencias en la Jurisdicción Agraria y Rural, que no correspondan a otra autoridad judicial.
      4. Preparar y presentar proyectos de ley y de actos reformatorios de la Constitución, en relación con los asuntos de su competencia.
      5. Ejercer las demás funciones que determine la ley.

**PARÁGRAFO 1º**. Las anteriores funciones se ejercerán con la garantía del derecho al acceso efectivo a la justicia, así como con la garantía de protección a los Grupos Étnicos: Comunidades Negras o Afrocolombianas, Palenquero, Raizales, Pueblos y Comunidades Indígenas, Comunidad Rom y de Víctimas. En lo que se refiere a la aplicación de la ley y su interpretación prima el principio de igualdad de los ciudadanos.

**ARTÍCULO 3°.** El artículo 238 de la Constitución Política quedará así:

**ARTÍCULO 238.** La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la Jurisdicción Agraria y Rural podrán suspender provisionalmente, en los asuntos que sean de su competencia, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial.

**ARTÍCULO 4°.** La Jurisdicción Agraria y Rural entrará a funcionar en un término no superior a dos (2) años siguientes a la promulgación de este acto legislativo. Su implementación será progresiva, durante los dos años y mientras entra en funcionamiento en todo el territorio nacional, se podrá adoptar un régimen de transición en los términos y condiciones que defina la ley.

**PARÁGRAFO 1º**. El Gobierno Nacional deberá agotar la consulta previa con los pueblos indígenas para emitir un decreto en el que se articule la Jurisdicción Rural y Agraria con la Jurisdicción Especial e Indígena, de suerte que se respete la autonomía y gobierno propio de los pueblos y comunidades en esta jurisdicción y en el régimen de transición.

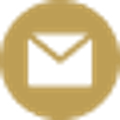
**PARÁGRAFO TRANSITORIO.** Dentro de los (6) meses posteriores a la promulgación de este acto legislativo, el Consejo Superior de la Judicatura, formará, capacitará y reasignará jueces especializados con carácter temporal en la Jurisdicción Ordinaria y de lo Contencioso Administrativo para resolver conflictos rurales y agrarios en todo el territorio nacional, hasta la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural.

**ARTÍCULO 5°.** El Congreso de la República tramitará y expedirá en la siguiente legislatura la ley por medio del cual se establezca la estructura, funcionamiento y competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, así como el Procedimiento Especial Agrario y Rural.

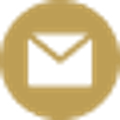
**ARTÍCULO 6°. VIGENCIA.** El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.



601 390 4050 - Ext. 3464



hernan.cadavid@camara.gov.co



hernan.cadavid@camara.gov.co



601 390 4050 - Ext. 3464

**HR. HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ H.R. MARELEN CASTILLO TORRES**

**PONENTE PONENTE**

**HR. ADRIANA CAROLINA ARBELAEZ H.R. GABRIEL BECERRA YAÑEZ**

**PONENTE PONENTE**

**H.R. ALVARO LEONEL RUEDA C. H.R. DELCY ESPERANZA ISAZA B.**

**PONENTE PONENTE**

**H.R. ORLANDO CASTILLO ADVINCULA H.R. ASTRID SANCHEZ MONTES**

**PONENTE PONENTE**

**HR. SANTIAFO OSORIO MARÍN H.R. LUIS ALBERTO ALBÁN**

**PONENTE PONENTE**